

## Conflicto armado interno en Colombia e intervencionismo estadounidense: el fracaso de las “tres guerras” (1947-2010)\*

### *Internal armed conflict in Colombia and U.S. interventionism: the failure of the "three wars" (1947-2010)*

por María Elina Zacarías\*\*

#### **Resumen:**

El objetivo de este artículo es analizar la influencia que la asistencia militar de Estados Unidos ha tenido en la política colombiana. El papel clave que Washington –a través de su influjo ideológico, doctrinario y económico– ha jugado en la orientación militar, política y estratégica del Estado colombiano, coadyuvó a la militarización de la sociedad colombiana. Así pues, se sostiene que la prolongación del conflicto interno y el rol asumido por las fuerzas armadas, bajo el patrocinio de Estados Unidos, en torno a las cuestiones de seguridad pública, han obstaculizado las iniciativas necesarias para mejorar el funcionamiento democrático, sumando aún más desafíos a los ya existentes.

\* Este artículo es un desprendimiento de una investigación realizada en el marco de la 3ª Edición de los Grupos de Investigación de Carrera de Ciencia Política, Grupo “Política de defensa y guerra en el Siglo XXI”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2011-2012. Contacto: elinazacarias@hotmail.com. Se agradecen, por otra parte, los comentarios y sugerencias de los evaluadores de la Revista.

\*\* Universidad de Buenos Aires – Escuela de Defensa Nacional.



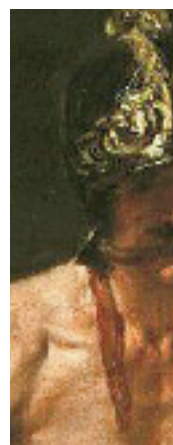
El artículo se encuentra estructurado del siguiente modo: en primer lugar, se describen brevemente los principales ejes que han motivado la asistencia militar a Colombia. Luego, se analizan los resultados negativos que han cosechado las estrategias perseguidas en torno a los problemas de orden público fundamentales, centradas primordialmente en la dimensión militar. Finalmente, se exponen algunas conclusiones, con el fin de “arrojar un poco de luz” sobre los desafíos que la fuerte militarización de la seguridad, promovida por la asistencia militar estadounidense, ha representado para el sistema democrático colombiano.

**Palabras claves:** asistencia militar – conflicto interno – militarización

**Abstract:**

The aim of this paper is to analyze the influence that the United States military assistance has had in Colombian politics. The key role played by Washington –through its ideological, doctrinaire and economic influence– on the military, political and strategic orientation of the Colombian State, contributed to the militarization of Colombian society. So, therefore, it is argued that the extension of the internal conflict and the role assumed by the armed forces, under the sponsorship of the United States, around public safety issues, have hampered the necessary initiatives to improve the democratic functioning, adding still more challenges to existing ones.

The article is structured in the following way: first, briefly describes the main axes that have motivated the military assistance to Colombia. Then, we analyze the negative results that have garnered the strategies pursued around key public policy issues, focusing primarily on the military dimension. Finally, we present some conclusions, in order to “shed some light” on the challenges that the heavy militarization of security, promoted by the American military assistance, has represented for the Colombian democratic system.



**Keywords:** military assistance – internal conflict – militarization

## 1. Introducción

Dentro del conjunto de países que conforman los Andes, Colombia se ha posicionado como uno de los casos más dramáticos en lo que a niveles de inestabilidad social y política refiere. Ello ha estado asociado a la existencia de un largo conflicto interno que, en sus diversas etapas, alcanzó elevados niveles de violencia y que se ha caracterizado por la superposición de un conjunto de problemas complejos y de intereses enfrentados, todo lo cual se exterioriza en la convivencia no pacífica de múltiples actores armados. A su vez, gran parte de la historia política de este país se ha visto empañada por la debilidad de las instituciones estatales, incapaces de asimilar el descontento social y ofrecer respuestas concretas a los problemas estructurales que se encuentran en la base de todos los conflictos internos.

Los orígenes del conflicto armado colombiano se remontan al período de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que se inició a mediados de 1940<sup>1</sup>, conocido como *La Violencia*. En este capítulo de la historia, las disputas por el derecho a la tierra y los enfrentamientos armados entre los dos partidos políticos se cobraron la vida de cerca de 300 mil colombianos.<sup>2</sup> Ante estas circunstancias, la vocación intervencionista de Estados Unidos encontró en Colombia un receptor oportuno, situa-

<sup>1</sup> Cabe señalar que si bien la violencia política interpartidista se originó en la década del '30, los sucesos más violentos estallaron con fuerza a mediados de 1940. En el año 1946 el Partido Conservador asumió la presidencia de la República de la mano de Mariano Ospina Pérez y, desde el gobierno, lanzó una ofensiva destinada a eliminar a los cuadros dirigentes y a los contingentes electorales de la oposición.

<sup>2</sup> Ramírez, M.; Stanton, K. y Walsh, J. (2005) "Colombia: un círculo vicioso de drogas y guerra". En C. A. Youngers y E. Rosin (eds.) *Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos*. Ed. Biblos: Buenos Aires; pp. 131-183.

ción que le permitió ejercer un rol clave en los problemas de seguridad interna de ese país. Más específicamente, con el fin de prolongar su influencia sobre Colombia, las sucesivas administraciones estadounidenses han tomado a la política de “contención del comunismo”, la denominada “guerra contra las drogas” –la cual alcanzó su punto más álgido en la década del ’90– y la más reciente “cruzada contra el terrorismo”, como medios para apoyar en Colombia el despliegue de operaciones de contrainsurgencia con el fin de silenciar a los sectores antagonistas de la población<sup>3</sup>.

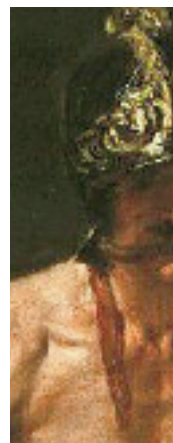
La relación estratégica que Colombia ha mantenido con Estados Unidos durante el período de tiempo estudiado –dominada cabalmente por la agenda de seguridad estadounidense– merece especial atención, en tanto Washington ha sido capaz, en coalición con la elite política y los oficiales militares, de guiar y definir el juego político.

Ahora bien, a pesar de la asistencia militar que inspiró al Estado colombiano a declararle literalmente la guerra a las organizaciones guerrilleras, el “narcotráfico” y el “terrorismo”<sup>4</sup>, el conflicto armado en Colombia aún no se detiene. Si bien desde sectores conservadores de la academia se argumenta que Colombia es un caso de intervención “exitoso”, lo cierto es que los costos que la nación colombiana ha tenido que pagar por esta guerra son inconmensurables<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Brittain, J. (2009) “US strategic interests in Latin America: the militarization of Colombia”. En *Global Research* [Disponible en: <http://www.globalresearch.ca/us-strategic-interests-in-latin-america-the-militarization-of-colombia/15853>]

<sup>4</sup> Sobre la problematización en torno al empleo del término “terrorismo” ver los artículos de Nievas, F. (2009) “Sociología de la guerra”. En *Revista Redes* N° 5 y Eissa, S. (2006) “Reflexiones acerca del terrorismo” [Disponible en: <http://www.marash.com.ar/ucam/servicios/profesionales/pys/nota5.htm>]

<sup>5</sup> Sobre la discusión en torno a la caracterización del conflicto armado colombiano ver Pizarro Leongómez, E. (2002) “Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua? En *Revista Análisis Político* N° 46. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.



No sólo la manifestación de la violencia persiste a gran escala, sino que la prolongación de una guerra interna que no se detiene ha afectado negativamente el funcionamiento del sistema de gobierno –en el marco de las democracias liberales de mercado–<sup>6</sup>. En este contexto, algunos de los problemas más serios han sido producto de la militarización de la sociedad: las fuerzas armadas colombianas han expandido sus funciones cada vez más hacia cuestiones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior<sup>7</sup>, favoreciendo así su propia politización, hecho que se torna contraproducente a la consolidación democrática<sup>8</sup>.

Asimismo, el desarrollo de este tipo de misiones conlleva consecuencias prácticas para el comportamiento institucional. En este punto no sólo subyace el peligro de la desprofesionalización militar, en tanto pérdida de capacidades de las fuerzas armadas para cumplir con su misión principal<sup>9</sup>,

<sup>6</sup> Respecto a la caracterización de la democracia, destacamos la utilidad del concepto de poliarquías de Robert Dahl, según la cual se trata de regímenes “que ponen el mínimo de restricciones a la expresión, organización, y representación de opciones políticas y a las oportunidades de que disponen los oponentes del gobierno. La mayoría de los individuos están efectivamente protegidos en su derecho a expresar, privada o públicamente, su oposición al gobierno, de organizar, de formar partidos y de competir en elecciones en que el voto es secreto, libre y correctamente computado y en que los resultados electorales son vinculantes en base a reglas bien establecidas.” Dahl, R (1971). *Poliarchy. Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press, pp. 4-5

<sup>7</sup> La seguridad interior del Estado refiere a la situación en la cual se garantizan la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la vigencia de las instituciones estatales dentro del propio territorio nacional. En contraste, la defensa exterior implica garantizar la soberanía, integridad territorial e independencia de la nación contra agresiones estatales militares externas, es decir, contra agresiones perpetradas por fuerzas armadas de otros Estados. En este marco, las denominadas “nuevas amenazas”, tales como el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y el crimen organizado pertenecen al ámbito de la seguridad interior.

<sup>8</sup> Watts, L. (2001) “Whose Professionalism?: Separating the Institutional Roles of the Military & Police”. En *Conflict Studies Research Centre* [Disponible en: [http://www.iskran.ru/cd\\_data/disk2/rr/046.pdf](http://www.iskran.ru/cd_data/disk2/rr/046.pdf)]

<sup>9</sup> Si bien no es nuestra intención profundizar sobre la cuestión de la profesionalización tal como ha sido explorada por la extensa literatura de las relaciones civiles-militares, cabe aclarar que concebimos una estricta separación entre los roles militares y policiales, en cuyo marco la misión principal de las fuerzas armadas se restringe a la seguridad exterior. Es en este sentido que planteamos que la participación de los militares en cuestiones vinculadas a la seguridad interior –y la consecuente expansión de roles y misiones que



sino que también destacan los riesgos asociados a la corrupción que se derivan de la confusión de roles y la dificultad que se presenta a la hora de construir instituciones civiles de seguridad interior fuertes<sup>10</sup>. En el caso de Colombia, la expansión de los roles de las fuerzas militares en el marco de la contrainsurgencia ha minado su profesionalización. Los militares mantienen vínculos muy estrechos con los sucesores de los paramilitares, acumulan pésimos antecedentes en materia de derechos humanos y registran altos niveles de corrupción que atañen prácticamente a todos los niveles de mando.

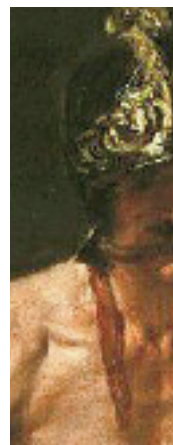
Si bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente formal la democracia colombiana es una de las más estables de América Latina, puesto que desde el año 1958 persisten gobiernos democráticamente electos, el rol asignado a las fuerzas armadas en el manejo del orden público entorpece la búsqueda de soluciones no militares a los problemas de la sociedad. A su vez, este empeño en el robustecimiento de las capacidades y presencia de las fuerzas militares contribuyó a correr el foco de los problemas sociales más acuciantes. El esfuerzo por militarizar todos los problemas de seguridad redundó, finalmente, en la dificultad por establecer instituciones civiles maduras capaces de cumplir con aquellas funciones.

En este orden de ideas, en la primera parte del trabajo describiremos sucintamente los principales ejes que han motivado la asistencia militar a

---

ello conlleva— los aleja de la misión principal y menoscaba la profesionalización de las fuerzas. No obstante, es preciso señalar que los planes como el Plan Colombia o Patriota han promovido la profesionalización y modernización de las tropas y que, incluso más, los militares colombianos se sienten más profesionalizados a partir de estos programas, pero ello claramente no se ajusta a los términos en que se entiende la profesionalización en este análisis. Sobre estas cuestiones y la diferenciación entre roles policiales y militares, consultar: Withers, G. et. al (2010) “Predica lo que practicas: la separación de roles entre militares y policías en las Américas”. Washington, DC: Washington Office on Latin America (WOLA); y Watts, L. (2001) “Whose Professionalism?: Separating the Institutional Roles of the Military & Police”. *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Withers, G. et. al (2010) “Predica lo que practicas: la separación de roles entre militares y policías en las Américas”. *Op. Cit.*





Colombia desde el período de *La Violencia* hasta el final del mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2010. Luego, nos concentraremos en el evidente fracaso de las tres guerras fundamentales que el ejército colombiano ha librado en su propio territorio bajo el auspicio y la presión de Washington. Finalmente, expondremos algunas conclusiones, con el fin de iluminar algunos de los desafíos que la fuerte militarización de la seguridad, promovida por la asistencia militar estadounidense, ha representado para el sistema democrático colombiano.

### **Insurgencia, narcotráfico y terrorismo: los 3 ejes de la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia**

A lo largo del siglo XX, Colombia estuvo alineada a las políticas de seguridad de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría adoptó la cruzada anticomunista sin resistencias y, posteriormente, se convirtió en un verdadero aliado del país del norte en la política contra las drogas y el “terrorismo”<sup>11</sup>. En la base de este alineamiento subyacen diversos conflictos internos que se relacionan con la historia de violencia que ha sacudido al país durante décadas. La conflictividad casi permanente que reinó desde mediados de la década del ‘40 alentó tempranamente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país y, a partir de entonces, Colombia ocupó año

<sup>11</sup> Estos hechos se enmarcan en la larga historia de intervencionismo y tendencia a la militarización de la política exterior de Estados Unidos en relación con el ámbito latinoamericano. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético, la política exterior de este país hacia América Latina se materializó en un fuerte intervencionismo estatal con el fin de combatir la insurgencia armada, en el marco de la estrategia de “contención del comunismo”. A partir de la década del ‘90, el narcotráfico pasó a ocupar el “lugar vacío” que había dejado el comunismo, y la inestabilidad asociada a la producción y el tráfico ilícito de drogas se posicionó como la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Finalmente, los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001 volvieron a forzar cambios en la política de defensa y seguridad de los Estados Unidos, y la “guerra global contra el terrorismo” pasó a ocupar el lugar más importante dentro de las prioridades en torno a la seguridad respecto de la región latinoamericana.



tras año uno de los primeros puestos en el *ranking* de receptores de asistencia militar y policial en la región<sup>12</sup>.

Desde una perspectiva histórica, es posible distinguir tres “etapas” en la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia: el período de Guerra Fría y la contrainsurgencia (1947-1990); la política antinarcóticos (1990-2001) y la “guerra contra el terrorismo” (desde el 2001 en adelante)<sup>13</sup>. Durante este transcurso de tiempo, Washington desplegó una modalidad de intervención indirecta a partir de la cual la guerra en Colombia dejó de tener características domésticas para convertirse “en epicentro de una guerra de baja intensidad cada vez más internacionalizada”<sup>14</sup>.

### **2.1 Guerra Fría y “contención” del comunismo**

Al período que se enmarca en el conflicto este-oeste, es preciso situarlo en la larga historia de desarrollo de la doctrina contrainsurgente que detenta Estados Unidos. A modo de ejemplo, cabe mencionar la Doctrina Truman (1947), que tempranamente institucionalizó una “política de contención” y de asistencia intervencionista para resistir al “comunismo internacional”. Con este bagaje, durante los años de la Guerra Fría fue fácil para dicho país incentivar a sus pares latinoamericanos para que adapten la doctrina contrainsurgente a su situación nacional, en respuesta a las

<sup>12</sup> Haugaard L. et al (2010) “Esperando el cambio; tendencias de la asistencia en seguridad de Estados Unidos para América Latina y el Caribe”. Washington, DC: Publicación conjunta del Centro para las Políticas Internacionales, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. .

<sup>13</sup> Zuluaga Nieto, J (2007) “U.S. Security Policies and United States-Colombia Relations”. En *Latin America Perspectives*. Vol. 34, N° 1. Respecto a esta división, cabe aclarar que no se trata de un proceso histórico lineal, puesto que las etapas se sobreponen, pero resulta útil a los fines estrictamente metodológicos.

<sup>14</sup> Tokatlian, J. G. (2004) “Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional”, en J. M. Gómez (comp.) *América Latina y el (des)orden global neoliberal*. Buenos Aires: CLACSO, p. 176.





incipientes organizaciones armadas, y en el marco de las denominadas “operaciones militares irregulares”.

En un contexto en el cual América Latina constituía la principal esfera de influencia de los Estados Unidos, Colombia comenzó a ser percibida como un punto clave en los esfuerzos por impedir la expansión de la influencia de la Revolución Cubana. De este modo, durante los años ‘50 y ‘60 los vínculos entre Colombia y la nación del norte se estrecharon cada vez más: Colombia fue uno de los primeros países en firmar un tratado de asistencia recíproca con Estados Unidos y entre 1961 y 1967 recibió alrededor de 60 millones de dólares en asistencia militar destinada a la contrainsurgencia y otros 100 en concepto de equipo militar<sup>15</sup>.

En otro orden de cosas, por esos años surgieron las primeras organizaciones de autodefensa o milicias paramilitares, que con el tiempo pasaron a dominar gran parte de la escena en el conflicto armado interno. Así pues, desde comienzos de la década del ‘60, Estados alentó la participación de los civiles en actividades paramilitares, tal como queda demostrado en esta cita perteneciente al informe de visita que redactó la comisión del Centro de Guerra Especial que visitó Colombia en 1962:

Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabe-

<sup>15</sup> Fundación CEPS (2006) “Colombia. Un país formal y otro real”. Valencia: *Fundación CEPS* [Disponibe en: <http://www.rebelion.org/docs/44923.pdf>]

mos que se van a necesitar para poner en función acciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto<sup>16</sup>

En el año 1965, mediante la sanción del decreto 3398 por el cual se organizaba la Defensa Nacional, se autorizó al gobierno a movilizar a la población para realizar actividades y tareas con el fin de restaurar el orden público<sup>17</sup>. De esta forma, las organizaciones de autodefensa pasaron a formar parte de la doctrina militar. Como consecuencia, comenzaron a tejerse importantes lazos entre soldados, policías y paramilitares.

A partir de entonces, estos grupos se han comportado bajo una modalidad criminal de características ominosas, contando con la colaboración con diversos actores de la sociedad civil, tales como militares, políticos, empresarios y terratenientes y en un contexto de total impunidad. Así pues, se han caracterizado por un accionar criminal que ha contado con la condescendencia –y en muchos casos colaboración– de las fuerzas militares. No sólo es posible identificar numerosos casos de masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en que miembros de las fuerzas militares y paramilitares han actuado conjuntamente en la comisión de los

<sup>16</sup> Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, Tema: Visita a Colombia, Sur América, por el Equipo de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962, Archivos de Seguridad Nacional, Grupo Especial, Suplemento Secreto, Informe de Investigación en Colombia, citado por AA.VV. (2000) *Colombia nunca más, crímenes de lesa humanidad, Zona 7ª*, [Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/index.html>]

<sup>17</sup> Decreto Legislativo 3398 de 1965, Diario Oficial N° 31.842, 25 de enero de 1966 [Disponible en: [http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm\\_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/D ECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf](http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/D ECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf)]



crímenes<sup>18</sup>, sino que también destaca la inacción de las fuerzas armadas en la persecución de los paramilitares.

## 2.2 Guerra contra las drogas

Esta etapa tuvo sus primeras manifestaciones en Colombia a fines de la década del '70. Desde el momento en que el presidente Richard Nixon utilizó por primera vez el término “guerra contra las drogas” en 1971<sup>19</sup>, las políticas contra el narcotráfico pasaron a constituir “el elemento decisivo en la valoración de seguridad de los Estados Unidos hacia Colombia.”<sup>20</sup>

Con el argumento de erradicar el consumo de drogas en su país, Washington comenzó a intervenir en los “países productores” de las sustancias consideradas ilícitas. Durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), la interdicción y erradicación de drogas constituyeron las dos piezas clave de la política antinarcóticos de Estados Unidos. Luego, comenzó a percibirse que el esfuerzo por erradicar las plantaciones manualmente ya no era suficiente y la Casa Blanca y el Congreso coincidieron en la necesidad de utilizar herbicidas para terminar con los cultivos de marihuana y coca. Como parte de esta estrategia, durante el gobierno del colombiano César Turbay (1978-1982) se llevó a cabo la primera campaña de fumigación aérea, mediante la cual miles de hectáreas fueron rociadas químicamente.

<sup>18</sup> Ver Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2006) “Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia” [Disponible en <http://www.colectivodeabogados.org/CONSOLIDACION-PARAMILITAR-E>]

<sup>19</sup> Jelsma, M. (2011) “The Development of International Drug Control: Lessons Learned and Strategic Challenges for the Future”, *Global Commission on Drug Policies* [Disponible en [http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp\\_v1/pdf/Global\\_Com\\_Martin\\_Jelsma.pdf](http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Com_Martin_Jelsma.pdf)]

<sup>20</sup> Zuluaga Nieto, J. (2007) “U.S. Security Policies and United States-Colombia Relations” *Op. Cit.*, p. 117. La traducción es propia.



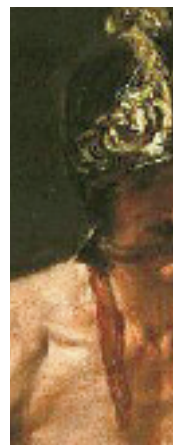
Hacia mediados de la década del '90, Colombia constituía el principal productor de coca del mundo y se perfilaba como un importante productor de amapola de opio, la materia base para la elaboración de heroína. En este contexto, el Programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, superó los niveles de asistencia del tradicional programa de Financiamiento Militar al Extranjero –por el cual se habían realizado todos los tipos de asistencia durante el período de la Guerra Fría– y se convirtió en la primer fuente de financiamiento para los militares de la región.<sup>21</sup>

Lo cierto es que a fines de los '90 la situación de violencia interna era verdaderamente alarmante. Como agravante, la administración de Ernesto Samper (1994-1998) experimentó una profunda crisis en las relaciones bilaterales con Estados Unidos a raíz de la sospecha de que el cartel de Cali había financiado la campaña presidencial de aquél. Como medida, Estados Unidos canceló la visa del presidente, prohibiéndole el ingreso al país y revocó la certificación de Colombia por falta de cooperación en el control de drogas<sup>22</sup>.

Irónicamente, Samper reaccionó llevando al extremo la criminalización de la guerra contra las drogas, al punto que durante su administración se produjo la más fuerte erradicación química de las últimas décadas. La

<sup>21</sup> Withers, G. et. al. (2010) “Predica lo que practicas: la separación de roles entre militares y policías en las Américas”. *Op. Cit.*

<sup>22</sup> En este caso, destaca una notable diferencia respecto a la actitud –por lo menos– displicente que los Estados Unidos tuvieron con el presidente Álvaro Uribe, respecto a su vinculación con el narcotráfico. Ver Burghardt, T (2012) “The Colombian ‘War on Drugs’, a Family Affair”, en *Global Research*. [Disponible en <http://www.globalresearch.ca/the-colombian-war-on-drugs-a-family-affair/5309195>]; Peña A. (2012) “El ex jefe de seguridad de Uribe se declara culpable de colaborar con los paramilitares”. *El país internacional*; “Se comprueba vínculo de la familia de Uribe con el narcotráfico”, *Patria Grande*, 10 de junio de 2012 [Disponible en: <http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/se-comprueba-vinculo-de-la-familia-de-uribe-en-el-narcotrafico/>]



inclusión de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas se hizo evidente con la denominada “Operación Conquista” que se proponía atacar los cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico en el sur del país con el fin de debilitar la principal fuente de recursos de las FARC.<sup>23</sup> Por otro lado, y con el propósito de mejorar las relaciones con Estados Unidos, el Congreso colombiano reinstauró la extradición. Finalmente, la elección al cargo de presidente de Andrés Pastrana en 1998 facilitó la restitución de las relaciones bilaterales, primordialmente las de naturaleza militar.

A fines de 1999, el Plan Colombia negociado entre el presidente Andrés Pastrana y Estados Unidos se constituyó en el elemento clave de la estrategia antinarcóticos y supuso la autorización por parte del Congreso de los Estados Unidos de cerca de 1.319 millones de dólares<sup>24</sup> para responder al conflicto interno en Colombia. Por detrás de esta plan, se escondía el argumento de que más poder de fuego y una extensión cada vez mayor del despliegue territorial del ejército eran las mejores estrategias para hacer frente al narcotráfico y al accionar guerrillero.

Cuando el Plan Colombia comenzó a ejecutarse en el año 2000 tenía una doble lógica: por un lado, reducir la producción y exportación de narcóticos, y por el otro, fortalecer la contrainsurgencia contra las guerrillas. Así, entre 2000 y 2005 Washington cedió cerca de 4 mil millones de dólares a Colombia, de los cuales un 75% del total se destinó al ejército y a la policía, y aumentó su presencia en el país con 800 soldados y 600 contratistas de seguridad privada<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Ferro J. y Uribe, G (2002) “Las marchas de los cocacoleros del Departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”. *Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*. Salamanca-España.

<sup>24</sup> Tokatlian, J. G. (2004) “Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional”. *Op. Cit.*

<sup>25</sup> Tokatlian, J. G. (2004) “La militarización de los Andes”. En *Project Syndicate* [Disponible en <http://www.project-syndicate.org/commentary/militarizing-the-andes/spanish>]



Si bien el Plan se proponía, además de la erradicación, contribuir al mejoramiento institucional del país<sup>26</sup>, las cifras demuestran la preeminencia de una visión estrictamente militar. Al respecto, “en 2002, a través de la Iniciativa Regional Andina, el Plan recibió 380 millones de dólares, el 70% destinado a gastos militares y el resto a los programas de desarrollo alternativo, justicia y desplazados”<sup>27</sup> y “sólo durante el 2003, Colombia percibió 553 millones de dólares en ayuda militar mientras que apenas 122 millones fueron transferidos para la asistencia social.”<sup>28</sup> Es más, según la misma fuente, “en el año 2004 varios países de la región no recibieron ningún tipo de ayuda de Estados Unidos para sus planes sociales, sin embargo, todos recibieron algún tipo de ayuda militar.”

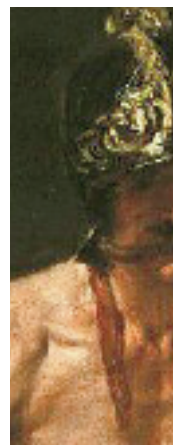
Desde el ámbito internacional, el Plan Colombia fue una de las intervenciones más cuestionadas. En un comunicado emitido en el año 2000, la organización Amnistía Internacional criticó de esta forma la concepción y el desarrollo del Plan Colombia:

El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora por completo las responsabilidades históricas y actuales del propio Estado colombiano. También ignora las causas profundas del conflicto y de la crisis de derechos humanos. El Plan se propone una estrategia principalmente militar para combatir los cultivos y el tráfico ilícitos de drogas a través de una sustancial asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía colombianas. Los programas de desarro-

<sup>26</sup> Álvarez Veloso, D. e Isenhouer, M. (2005) “Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto”. En *FLACSO Chile*, Observatorio N° 2.

<sup>27</sup> Fundación CEPS (2006) “Colombia. Un país formal y otro real”. *Op. Cit.*, p. 89.

<sup>28</sup> Álvarez Veloso, D. e Isenhouer, M. (2005) “Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto”. *Op. Cit.*, p.2.





llo social y de asistencia humanitaria incluidos en el Plan no pueden ocultar su carácter esencialmente militar (...)<sup>29</sup>

Aunque ciertamente algunos de los efectos del Plan Colombia obligaron a las FARC a replegarse, ello no supuso en absoluto su desaparición. Como consecuencia, se puso en práctica una segunda etapa denominada “Plan Patriota”, que comenzó a ejecutarse a fines del año 2003. En este marco, las operaciones se intensificaron y en la fase del Plan que se dio a conocer como “Operación JM”, y para la cual se contó con el respaldo de asesores y personal de logística y planeamiento de Estados Unidos, más de 18 mil soldados fueron enviados a los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, para capturar a los líderes de las FARC.

Con el tiempo –y ante los evidentes fracasos cosechados– el énfasis en la fumigación con herbicidas comenzó a decrecer y, en cambio, se puso en marcha la doctrina de “Acción Integral”, originada en el Comando Sur de los Estados Unidos y en el Ministerio de Defensa de Colombia, quienes coordinaron la creación del Centro para la Coordinación de la Acción Integral (CCAI). Este enfoque prioriza la “construcción del estado” y se basa en una combinación de proyector militares y de desarrollo social conducidos en las zonas de mayor producción de coca, con el fin de garantizar la presencia territorial de las autoridades civiles.

### **2.3 Guerra global contra el terrorismo**

Los atentados del 11 septiembre de 2001 dieron una nueva fuerza a la “guerra contra el terrorismo”. La agenda estadounidense en materia de

<sup>29</sup> Amnesty International (2000) “Amnesty International’s position on Plan Colombia”. En *Amnesty International*. [Disponible en <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/049/2000/en/51b36bee-0fed-4c64-ba4c-b1fd9a58e293/amr230492000en.pdf>.] La traducción es propia.

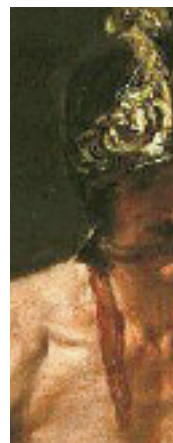
seguridad nuevamente se vio alterada por los cambios en el orden internacional. Como consecuencia, la guerra contra el terror eclipsó a la guerra contra las drogas y Colombia se convirtió en el teatro de operaciones por excelencia del “contraterrorismo” en América del Sur.

En este marco, las prioridades estratégicas de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre colocaron a Colombia nuevamente en un lugar privilegiado dentro de la agenda de seguridad hemisférica. Si bien las FARC constituyeron el principal blanco sobre el cual se implementó la estrategia antiterrorista, cabe señalar que tanto éstas como el ELN y las AUC formaban parte de la lista “negra” de “organizaciones terroristas extranjeras” del Departamento de Estado de los Estados Unidos<sup>30</sup>.

A estos sucesos hay que sumarle el fracaso en el año 2002 del proceso de paz que el ex presidente Andrés Pastrana había comenzado con las FARC, lo cual internacionalizó aún más el conflicto permitiendo la intervención de Estados Unidos. En conjunto, estos aspectos explican, en parte, el lugar de privilegio que Colombia ocupó en la Estrategia Nacional de Seguridad del año 2002:

En Colombia, reconocemos el vínculo entre terroristas y grupos extremistas que desafían a la seguridad del Estado y actividades asociadas al tráfico de drogas que contribuyen a financiar las operaciones de tales grupos. Estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales tanto de izquierda como de derecha, extendiendo su soberanía efectiva sobre

<sup>30</sup> Ver: U.S Department of State: *Foreign Terrorist Organizations*. Disponible en: <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>



todo el territorio nacional y proveyendo seguridad al pueblo colombiano.<sup>31</sup>

Por otro lado, en agosto del 2002 –meses después del fracaso de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC– el Congreso de Estados Unidos aprobó una petición de la administración Bush a fin de permitir que la asistencia financiara la campaña unificada contra las drogas y contra las guerrillas, redefiniendo, de esta forma, la estrategia contrainsurgente. Así pues, se ponía fin a la separación clásica entre asistencia económica y militar a Colombia respecto a la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados. Como consecuencia, a partir de esos años se volvió imposible diferenciar la ayuda financiera antinarcóticos de la destinada al combate del terrorismo o a la guerra contrainsurgente.

En Colombia esta determinación encontró una buena recepción en el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), en sintonía con la “línea dura” que implicó la Política de defensa y Seguridad Democrática<sup>32</sup>. En concordancia con la visión estadounidense, se definió al terrorismo como “el principal método que utilizan las organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana” y afirma que “frente al terrorismo

<sup>31</sup> National Security Council (2002): *The National Security Strategy of the United States of America*. [Disponible en <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/>]

<sup>32</sup> En el año 2003 el entonces presidente Álvaro Uribe publicó un documento denominado *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, el cual contenía los aspectos medulares de lo que constituiría su principal política de gobierno. Esta política se propuso como principal objetivo “garantizar el Estado de derecho en todo el territorio”, apelando al involucramiento de toda la sociedad en la lucha contra los grupos insurgentes. Desde esta óptica, el documento mencionado considera como amenazas inmediatas a la seguridad las siguientes: “el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, las municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, el homicidio”. Ver República de Colombia (2003) *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, Presidencia de la República – Ministerio de Defensa. [Disponible en <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>]



sólo puede haber una respuesta: derrotarlo”<sup>33</sup>. Sin embargo, a la hora de poner en práctica esta política, y en virtud la ambigüedad y amplitud que el término “terrorismo” detenta, no sólo las organizaciones insurgentes, sino también diversos actores sociales como políticos, sindicalistas, periodistas, activistas de derechos humanos y jueces fueron acusados de “terroristas”.

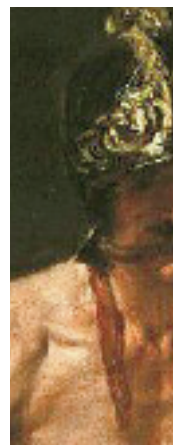
En este marco Uribe concedió amplios poderes a la Fuerza Pública, propiciaron los abusos por éstas cometidos y el aumento de la presencia de los grupos paramilitares en muchos municipios de las denominadas “zonas de rehabilitación y consolidación”.

Por último, cabe realizar algunas apreciaciones sobre las tendencias que se vienen presentando en los últimos paquetes de asistencia provenientes de Estados Unidos. En términos generales, desde el año 2011 se observa una disminución en la cantidad de ayuda militar y policial destinada a Colombia, incluyendo los programas antinarcóticos, el financiamiento militar, la asistencia antiterrorista y los programas del Departamento de Estado. Al mismo tiempo, se registran aumentos en lo que constituye la ayuda económica. Así pues, el presupuesto correspondiente al año 2013 se propone contribuir a los esfuerzos de Colombia por expandir la presencia del Estado en las zonas claves del conflicto. Según el Resumen Ejecutivo del Presupuesto realizado por el Departamento de Estado, la asistencia continua de Estados Unidos asegurará el sostenimiento del progreso alcanzado en el Estado de Derecho, los derechos humanos y el desarrollo económico y social<sup>34</sup>.

No obstante, pese a que la ayuda no militar parece estar adquiriendo cada vez más importancia –puesto que los recortes presupuestarios no la

<sup>33</sup> República de Colombia (2003) *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Op. Cit.

<sup>34</sup> United Sate of America Department of Defense (2012) “Executive Budget Summary”, Fiscal Year 2013 [Disponible en <http://www.state.gov/documents/organization/183755.pdf>]



afectan en gran medida— muy probablemente el financiamiento y apoyo logístico, las fumigaciones y el asesoramiento militar tendrán continuidad, al menos en un futuro cercano.

### **La larga lista de fracasos obtenidos: consecuencias indeseables para la paz**

En la actualidad, pese a que Estados Unidos sigue siendo el actor externo con mayor influencia sobre Colombia, el conflicto interno colombiano no ha encontrado solución. Graves amenazas al orden democrático, tales como enfrentamientos armados entre la fuerza pública y los grupos insurgentes, desplazamiento forzado de personas, serias violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, se suceden casi con normalidad.

Los costos humanos y económicos que se han tenido que pagar a causa de la “opción por la guerra” son sorprendentes. A estas alturas, parece claro que las armas están diseñadas para matar y, en consecuencia, aplicar la lógica del poder de fuego al interior de la sociedad supone poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos. Se estima que desde el año 2002 más de 21000 combatientes, contando a militares, policías, paramilitares y miembros de las guerrillas<sup>35</sup> y alrededor de 14000 civiles no combatientes han muerto en Colombia<sup>36</sup>.

A continuación, nos limitaremos a analizar brevemente los principales ejes que actualmente dan contenido al conflicto interno, con el convencimiento de que el fracaso en el tratamiento de los problemas de seguridad pública deviene de una óptica errada, que prioriza la militarización de la

<sup>35</sup> The Center for International Policy’s (2010) “Plan Colombia and Beyond”. En *The Center for International Policy’s*, Colombia Program [Disponible en: <http://www.cipcol.org/?p=1471>]

<sup>36</sup> Isacson, A. (2010) “Don’t call it a model. On Plan Colombia’s tenth anniversary, claims of ‘success’ don’t stand up to scrutiny”. En *Washington Office on Latin America*



seguridad en lugar de definir políticas públicas eficaces para tratar de solucionar los problemas sociales estructurales.

### **Presencia de las Guerrillas**

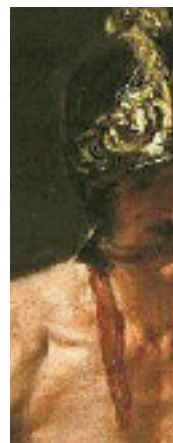
Organizaciones independientes han apuntado que desde el año 2008 se presencia un pequeño aumento en la actividad de las guerrillas y de los paramilitares. Así, por ejemplo, la Corporación Nuevo Arco Iris, en un informe del año 2009 sobre el balance anual del estado del conflicto armado en Colombia, señaló que las FARC estaban recuperando territorios<sup>37</sup>. Asimismo, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Colombia pensaba en el año 2010 que “las FARC en tanto grupo guerrillero se han adaptado con dinamismo y una vez más tienen la capacidad, como hemos visto en los últimos dos o tres meses, de continuar siendo un actor importante en el conflicto armado”<sup>38</sup>.

Hoy día, a más de 8 años de la puesta en ejecución del “Plan Patriota”, las FARC todavía mantienen una fuerte presencia en los principales territorios donde aquél comenzó a operar. Así pues,

aun cuando los rebeldes sufrieron importantes reveses durante la década de Uribe (2000-2010), desde 2008 en adelante vienen reconstituyendo lo esencial de sus fuerzas. La pérdida de varios de sus dirigentes, eliminados en emboscadas, no impidió a las FARC iniciar una contraofensiva que, desde hace cuatro años, conjuga minas antipersonales, tiradores de elite y ataques con bombas. Según un informe reciente del Congreso colombiano,

<sup>37</sup> “La Seguridad Democrática llegó a su techo: Arco Iris”, *Semana*, 25 de noviembre de 2009 [Disponible en: <http://www.semana.com/conflicto-armado/seguridad-democratica-llego-su-techo-arco-iris/131797-3.aspx>]

<sup>38</sup> Citado en Isacson, A (2010) “Don’t call it a model. On Plan Colombia’s tenth anniversary, claims of ‘success’ don’t stand up to scrutiny”. *Op. Cit.*





la guerrilla disponía en 2011 de una “presencia significativa” en un tercio de las municipalidades del país<sup>39</sup>.

No obstante, el hecho que despierta mayor preocupación es la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre las guerrillas y el gobierno colombiano. Cabe recordar que a mediados del mes de octubre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron en Oslo una mesa de negociaciones que entrará en funciones el 15 de noviembre en La Habana, compromiso que fue asumido en el mes de agosto en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. La agenda de las negociaciones contempla principalmente dos asuntos: el desarrollo rural con acceso a la tierra y la garantía de que los grupos armados podrán reinsertarse en la vida política, evitando así lo que sucedió en la década de los ‘90 con la Unión Patriótica, que implicó el asesinato masivo de sus militantes.<sup>40</sup>

Desde nuestro punto de vista, gran parte de la dificultad para arribar a un acuerdo de paz deriva de la falta de reconocimiento de las FARC como actor político. Juan Gabriel Tokatlian señala que una de las condiciones fundamentales para entablar un proceso de negociación exitoso es el reconocimiento del otro, que

implica aceptar la existencia y la razón de ser del otro, por parte de los dos adversarios. El contrincante, el opositor o el enemigo -como se lo quiera identificar- es un sujeto de diálogo para un potencial acuerdo y no un objeto de manipulación para una

<sup>39</sup> Wilpert, G. (2012) “¿Por qué la paz en Colombia se ha vuelto posible?”. En *Le Monde Diplomatique* N° 160.

<sup>40</sup> “La paz en Colombia”, *Página 12*, 19 de octubre de 2012

imposible transacción. Aquel reconocimiento contribuye a humanizar al otro; lo que no significa compartir su ideología, reivindicar sus creencias, asumir sus valores y convalidar sus mecanismos de acción. Las diferencias reales y/o construidas entre dos partes pueden ser genuinamente enormes, sin embargo ello no impide la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos<sup>41</sup>.

En fin, el éxito de la negociación hoy vigente dependerá de la predisposición de cada una de las partes –incluidos los Estados Unidos– y de los límites en torno a lo que están dispuestas a ceder para poner a fin a 50 años de conflicto armado.

### ***Paramilitares y sus sucesores***

En el año 2003, durante el primer gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de desmovilización de los paramilitares que fue ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, al igual que la “Ley de Justicia y Paz”<sup>42</sup> sancionada en el año 2005.

Desde entonces, más de 30 mil personas han participado de este proceso. No obstante, actualmente existen grupos sucesores de los militares (“Machos”, “Rastrojos”, “Nueva Generación”, “Urabeños”, “Paisas”, “Renacer”, por ejemplo) que siguen controlando las regiones más conflictivas del

<sup>41</sup> Tokatlian, J. G. (1993) “Los diálogos gobierno-guerrilla en Colombia y las experiencias internacionales: ¿negociando la paz o perpetuando la guerra?”. En *Historia Crítica* N° 7 pp. 5-8

<sup>42</sup> La Ley de Justicia y Paz reduce las penas para los militares desmovilizados que confiesen haber cometido violaciones a los derechos humanos o aporten datos a la justicia. Si bien las condenas luego de la sanción de la ley han sido escasas –al punto que algunos observadores le asignan un “rotundo fracaso”–, la colaboración mediante confesiones se redujo notablemente cuando el entonces presidente Uribe ordenó la extradición a Estados Unidos de la mayoría de los líderes de las organizaciones paramilitares entre mayo de 2008 y agosto de 2009.



país y comenten abusos generalizados contra los civiles. Según un informe de *Human Rights Watch*, “la Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país.”<sup>43</sup>

Diversas Organizaciones no Gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos señalan en sus informes que estos nuevos grupos reproducen las peores prácticas heredadas de los paramilitares. En primer lugar, desarrollan vínculos con las redes del narcotráfico y llevan a cabo abusos de forma generalizada, tales como asesinatos, masacres y desplazamientos forzados. Por otro lado, han demostrado que cuentan con la tolerancia y colaboración de la Fuerza Pública –lo que quizás constituya una de las principales razones del mantenimiento de su poder–, como así también de la clase política.

En este último caso, cabe recordar el escándalo de la “parapolítica” desatado a partir del 2006, suceso en el cual se investigó –y en algunos casos condenó– a más de un centenar de ex congresistas sospechosos de mantener vínculos con dichas organizaciones<sup>44</sup>. En otros terrenos, por el contrario, las investigaciones han andado un camino muy corto todavía, pese a que “numerosos paramilitares desmovilizados también han declarado que tenían extensos vínculos de colaboración con políticos locales, altos oficiales de las fuerzas armadas y empresarios”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Human Rights Watch (2011) “Colombia. Eventos del 2010” [Disponible en <http://www.hrw.org/es/world-report-2011/colombia-0>]

<sup>44</sup> Ver “El escándalo de la ‘parapolítica’ en Colombia”, *El país*, 20 de febrero de 2007; “Condenan ex presidente del Congreso colombiano por parapolítica”, *Prensa Libre*, 25 de mayo de 2011; “Las pruebas hablan por sí sola”, *Semana.com*, 11 de noviembre de 2006.

<sup>45</sup> Human Rights Watch (2011) “Colombia. Eventos del 2010”. *Op. Cit.*

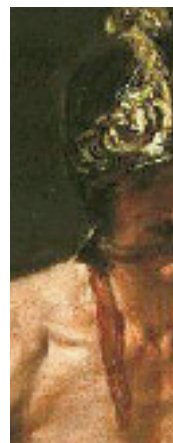


## **Narcotráfico**

A pesar de los miles de millones de dólares que Colombia había recibido de Estados Unidos entre 1989 y 1999, en las puertas del año 2000 el problema del narcotráfico seguía intacto. Contrariamente a la confianza que el Plan Colombia despertó en los sectores más conservadores<sup>46</sup>, los resultados surgidos de este programa tampoco son muy alentadores. A poco más de una década después de su puesta en ejecución, las victorias de los Estados Unidos en esta guerra han sido parciales o limitadas y, lo más importante, han acarreado daños considerables a la población civil.

En primer término, en lo que refiere a los esfuerzos por erradicar la producción y el tráfico de narcóticos —en particular, cocaína—, los resultados distan bastante de los esperados. Las intensas fumigaciones aéreas con herbicidas patrocinadas por los gobiernos de Washington y Colombia, que se intensificaron a partir de 1990, resultaron inefectivas. Dos de las consecuencias directas de esta práctica han sido el traslado territorial de los cultivos y el desarrollo de variantes de los mismos, más resistentes a los herbicidas. Es decir que, si bien el porcentaje de tierras cultivadas se redujo en determinados períodos, lo que se logró fue una mayor descentralización de la producción. A su vez, no se puede desestimar la crueldad que semejante política conlleva: miles de personas se han visto afectadas por los químicos de los herbicidas, sin recibir ningún tipo de asistencia por parte de las instituciones estatales.

<sup>46</sup> En el mes de abril de 2010, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Robert Gates visitó Bogotá y declaró que “es muy alentador ver el progreso continuado que está haciendo esta gran nación bajo el liderazgo del presidente Uribe” y expresó que los esfuerzos que el ex presidente estaba dirigiendo contra los narcotraficantes y terroristas eran “heroicos” (la traducción es propia). “Press Conference with Secretary Gates and Colombian Minister of National Defense Silva from Bogota, Colombia”. *U. S. Department of Defense* [Disponible en <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4607>]



Por otro lado, el fortalecimiento –tanto en tamaño como en capacidades– de la Fuerza Pública, en particular de las fuerzas armadas, para hacer frente al narcotráfico, no sólo ha representado un gasto económico considerable, sino que, al perder de vista la misión primaria de la defensa exterior y concentrar los esfuerzos en otras misiones, ha provocado una enorme desprofesionalización del instrumento militar.

Respecto a la “Acción Integral”, los resultados también son cuestionables. Si bien desde el gobierno pareciera haber una mayor preocupación por garantizar la presencia del Estado en zonas donde ha estado crónicamente ausente, al observar las tres “etapas” que conforman el proceso, fácilmente se deduce la preponderancia del factor militar. Tanto el Plan Colombia como la Política de Defensa y Seguridad Democrática<sup>47</sup> se han concentrado en garantizar la presencia de la dimensión militar del Estado, subestimando el desarrollo de instituciones civiles sólidas y estables.

Finalmente, cabe mencionar que la disolución de los dos carteles más importantes a mediados de los ‘90 –los de Medellín y Cali– tampoco supuso la disminución del narcotráfico ni la disponibilidad de drogas en Estados Unidos, sino que, por el contrario, alteró y democratizó la estructura del comercio de drogas. Los carteles fueron reemplazados por organizaciones más pequeñas y la producción de coca se incrementó notablemente<sup>48</sup>.

En definitiva, ni la fumigación química, particularmente con glifosato –sustancia sumamente contaminante y perjudicial para la salud– ni la consolidación de la presencia militar en las zonas más afectadas demostraron

<sup>47</sup> En el marco de esta política, Uribe defendió las prerrogativas militares, aumentó el número de tropas de combate y la presencia del Ejército en áreas desprotegidas, continuó con la fumigación aérea y alentó a la población civil a colaborar con los militares.

<sup>48</sup> A comienzos del año 2000, se estima que había alrededor de 300 organizaciones de menor tamaño que los carteles dedicadas al tráfico de drogas, conocidas como *cartelitos*. Bagley, B (2012) “Drug trafficking and organized crime in the Americas. Major trends in the twenty-first century”. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars [Disponible en <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/BB%20Final.pdf>]



ser efectivas para terminar con el problema de las drogas. Los cultivos se trasladaron territorialmente a medida que las fumigaciones se intensificaron y todavía hoy se cultiva en grandes proporciones: del total de cocaína que se consume a nivel mundial, el 45% se produce en Colombia, del 35 al 40 en Perú y del 15 al 20 en Bolivia, lugares desde donde se distribuye a cerca de 174 países<sup>49</sup>.

### ***Impunidad de los militares: lamentables antecedentes en materia de derechos humanos***

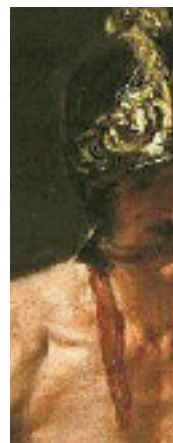
En materia de derechos humanos, Colombia presenta índices alarmantes de abusos. Según un informe de Amnistía Internacional, los militares “en colaboración con grupos paramilitares, participan directamente en homicidios, torturas y «desapariciones» y han aumentado sus esfuerzos para intimidar a los defensores de derechos humanos, líderes campesinos y activistas sociales, poniéndolos a menudo en peligro al calificarlos de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla”<sup>50</sup>.

Cerca del 30% de la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos en materia de derechos humanos. Estas “condiciones” exigen que el Secretario de Estado certifique que el gobierno está haciendo todo lo posible en materia de derechos humanos, garantizando el curso de las investigaciones y el procesamiento de los militares involucrados en abusos o que hayan prestado apoyo a las organizaciones paramilitares<sup>51</sup>. Además de estas condiciones,

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Amnistía Internacional (2004) “Un laboratorio de guerra: la violencia aumenta en Arauca”. En *Amnistía Internacional* [Disponible en <http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/un-laboratorio-de-guerra-la-violencia-aumenta-en-arauca/>]

<sup>51</sup> Isacson, A. et. al. (2007) “Por debajo del radar. Programas militares de EE.UU. con América Latina 1997-2007”. Washington, DC: Publicación conjunta del Center for International Policy, the Latin America Working Group Education Fund, y the Washington Office on Latin America (WOLA), p.1.





que han sido incluidas en las partidas presupuestarias para el Plan Colombia, la denominada “Ley Leahy”, que se incorpora anualmente a los proyectos de ley de asignación de fondos para operaciones en el exterior de Estados Unidos, prohíbe el ofrecimiento de capacitación a aquellas unidades extranjeras sobre las que existan evidencias suficientes de comisión de violaciones a los derechos humanos y el gobierno no haya tomado los recaudos necesarios para garantizar el juzgamiento de los responsables.

No obstante las numerosas pruebas de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas armadas, la asistencia estadounidense nunca se interrumpió: en septiembre de 2010 –por segunda vez durante la presidencia de Barak Obama– el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que Colombia cumplía con los requisitos de derechos humanos, aunque aún existían “problemas significativos”, en referencia a las amenazas y ataques a activistas.<sup>52</sup> Bajo estas circunstancias, la situación ha adquirido el matiz de un círculo vicioso en el cual la asistencia no se detiene pese a las condiciones impuestas y las unidades militares receptoras siguen involucradas en serios abusos, a pesar de esas mismas restricciones.

Según el ya citado informe de la organización *Human Rights Watch*<sup>53</sup>, en el último tiempo se han atribuido al Ejército colombiano una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo los casos de “falsos positivos”<sup>54</sup>. En este campo, la impunidad sobresale en la agenda: las sentencias sobre ejecuciones extrajudiciales han sido muy pocas en relación al gran número de investigaciones iniciadas y, por otro lado, todavía per-

<sup>52</sup> “Estados Unidos certifica a Colombia en cumplimiento de derechos humanos”, *El Espectador*, 15 de septiembre de 2011.

<sup>53</sup> Human Rights Watch (2011) “Colombia. Eventos del 2010”. *Op. Cit.*

<sup>54</sup> Con este término se hace referencia a los asesinatos de civiles inocentes que los militares hacen pasar como combatientes muertos en combate.

siste una evidente negativa por parte de la justicia militar para permitir que los casos se juzguen en tribunales ordinarios.

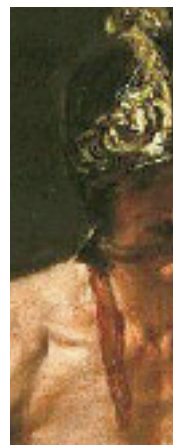
Desde que asumió la presidencia en 2010, Juan Manuel Santos parece mostrar una preocupación mayor que su antecesor Álvaro Uribe por la cuestión de los derechos humanos<sup>55</sup>, no obstante, los resultados en la materia todavía son incipientes<sup>56</sup>. Cabe señalar que la administración del presidente Uribe estuvo marcada por varios sucesos escandalosos entre los que destacan: ejecuciones extrajudiciales llevadas cabo por miembros del ejército nacional; el caso de la “parapolítica”, en el cual se constató que miembros del Congreso Nacional tenían estrechos vínculos con las organizaciones paramilitares<sup>57</sup>; un proceso de desmovilización paramilitar por demás cuestionado y las prácticas ilegales perpetradas por el servicio de inteligencia nacional (DAS).

Otro asunto de derechos humanos que ha cobrado gran notoriedad es el relativo a la violencia que se emplea contra sindicalistas y defensores de derechos humanos. Al respecto, Colombia posee índices altísimos de ataques, amenazas, secuestros y asesinatos a líderes sindicales. Según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), una de las principales ONG colombianas dedicada al monitoreo de los derechos laborales, desde el 1 de enero de 1986 hasta el 30 de agosto de 2010, han sido asesinados en

<sup>55</sup> Human Rights Watch (2011) “Colombia. Eventos del 2010”. *Op. Cit.*

<sup>56</sup> Al respecto, cabe recordar que Juan Manuel Santos fue Ministro de Defensa de su antecesor entre los años 2006 y 2009. Estando ya en funciones, y luego que el esquema de recompensas del Proceso de Justicia y Paz se pusiera en práctica, Santos respondió a los informes sobre ejecuciones extrajudiciales realizados por las organizaciones de derechos humanos diciendo que eran “una pantomima con claras intenciones políticas”. Reeves, E (2012) “Justice for Colombia”. En *ProgressOnline* [Disponible en <http://www.progressonline.org.uk/2012/04/13/justice-for-colombia/>]

<sup>57</sup> En el 2011, el antiguo jefe de campaña de Álvaro Uribe y ex director de los servicios secretos, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión por haber colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país.



Colombia 2.842 sindicalistas, 25,7% de los cuales eran dirigentes sindicales.<sup>58</sup>

En relación a los defensores de derechos humanos, si bien el presidente Juan Manuel Santos ha proclamado públicamente la independencia del poder judicial y repudiado las acciones violentas contra estos activistas –contrariamente a la posición tomada por Uribe, quien durante su mandato los estigmatizó y llegó, incluso, a tratarlos de terroristas<sup>59</sup>–, las intimidaciones, amenazas y agresiones no sólo no se detienen, sino que han aumentado durante los últimos años. Según la ONG Somos Defensores, en el año 2011 239 de ellos fueron agredidos, 140 sufrieron amenazas, 49 fueron asesinados y 6 desaparecidos<sup>60</sup>.

### **El fracaso del “modelo colombiano” de militarización de la seguridad: desafíos para el sistema democrático**

En las páginas precedentes hemos intentado reflejar la compleja trama que se teje en los vínculos que Estados Unidos mantiene con Colombia respecto a las cuestiones que atañen a la “seguridad nacional” –entendida en los términos en que la definen esos países–. Esta relación, en la cual

<sup>58</sup> Sanjuán L. et al. (2010) “Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2012”. En *Escuela Nacional Sindical*, Cuaderno de Derechos Humanos N° 22. Colombia, p. 45.

<sup>59</sup> Ver Reiniciar (2010) “Presidente Uribe, nuevamente acusa de terroristas a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”. En *Reiniciar* [Disponible en <http://www.reiniciar.org/node/291>]

<sup>60</sup> Somos Defensores (2012) “2011: cada 8 días fue asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia”. *Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH)* [Disponible en: [http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=105:2011-cada-8-dias-fue-asesinado-un-defensor-de-derechos-humanos-en-colombia-&catid=20:informe-siaddhh-2011&Itemid=11](http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2011-cada-8-dias-fue-asesinado-un-defensor-de-derechos-humanos-en-colombia-&catid=20:informe-siaddhh-2011&Itemid=11)]

hemos identificado tres ejes que han motivado la intervención a lo largo de la historia –Guerra Fría y contrainsurgencia, políticas antinarcóticos y guerra contra el terrorismo–, se materializó en millonarios paquetes de asistencia militar y estimuló la participación de las fuerzas armadas colombianas en cuestiones de orden público.

Al respecto, si bien atribuir la adopción de dichas misiones por parte de las fuerzas militares de Colombia exclusivamente al factor externo reflejaría una visión muy sesgada de la realidad, no puede desestimarse el papel clave que Estados Unidos ha jugado en la orientación militar, política y estratégica del Estado colombiano. En este sentido, el influjo ideológico, doctrinario y económico proveniente de Estados Unidos impactó en el comportamiento de las fuerzas armadas, hecho que ha sumando aún más desafíos a los ya existentes para el desenvolvimiento del orden democrático.

Lo cierto es que históricamente la política exterior de Colombia ha jugado un papel clave en las modalidades que han adquirido las respuestas del país a sus problemas internos. Es decir que el gobierno colombiano ha recurrido a Estados Unidos para que a través de la asistencia militar intervenga con el fin de resolver sus problemas internos. Sin embargo, el tipo de intervención y la conformación de los paquetes de asistencia se definieron mucho más por la agenda de Washington que por los propios intereses de Colombia. En este marco, puede observarse que “a pesar del carácter básicamente político de los problemas que enfrenta el país, Estados Unidos lo ha visto principalmente a través de la óptica de la seguridad, privilegiando su intervención en las fuerzas armadas y en la policía, tendencia que se intensificó desde el 11 de septiembre”<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Ramírez, M. C. et. al (2005) “Colombia: un círculo vicioso de drogas y guerra”, en C. A. Youngers y E. Rosin (eds.) *Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos*. Ed. Biblos: Buenos Aires.



Al decir de Adam Isacson<sup>62</sup>, al militarizar la guerra contra las drogas, Washington intensificó algunos de los peores aspectos de su estrategia de Guerra Fría en América Latina, en tanto supuso una nueva justificación de las operaciones militares contra un “enemigo interno” inserto en la sociedad, a la vez que, como contrapartida, ofreció muy pocos incentivos para encarar verdaderas reformas estructurales que permitieran tratar los conflictos desde su origen. En este sentido, señala este mismo autor, es hora de comenzar a reconocer que “seguridad” es mucho más que exclusivamente el objetivo militar.<sup>63</sup>

Es decir que el tratamiento militar del conflicto no sólo demostró ser un fracaso –tal como se expuso en el apartado anterior–, sino que tampoco permitió resolver los problemas estructurales básicos de la sociedad colombiana, tales como la pobreza, la desigualdad, la opresión, las características excluyentes del régimen político, las razones socioeconómicas relativas a la producción y consumo de drogas, y los altos índices de violencia. En este orden de ideas, resulta interesante subrayar una reflexión de Thomas Bruneau, quien al referirse a los conflictos armados internos como los que atraviesa Colombia, enfatiza que “existen causas económicas, políticas, y sociales que subyacen a los conflictos y que las fuerzas de seguridad por sí solas no puede resolverlas [y que en estos casos] la lucha tiende a prolongarse, y es casi imposible declarar ‘victoria’”<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Isacson, A. (2005) “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”. En en C. A. Youngers y E. Rosin (eds.) *Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos. Op. Cit.*

<sup>63</sup> Vaicius, I. e Isacson, A (2003) “The ‘war on drugs’ meets the ‘war on terror’. The United States’ military involvement in Colombia climbs to the next level”. En *International Policy Report* . Washington, DC: Center for International Policy.

<sup>64</sup> Bruneau, T. y Cristiana, F. (2011) “Hacia una nueva conceptualización de la democratización y las relaciones civiles militares”. En *Democratization*. Vol. 18, N°. 3, p.12.



Por otro lado, a través del financiamiento de las fuerzas armadas y la promoción de estas guerras, se ha contribuido también a la militarización de los diversos actores en conflicto y al fortalecimiento de la actitud represiva tanto por parte del Estado (fuerzas armadas y policiales) como de organizaciones pertenecientes al ámbito civil (paramilitares y sus sucesores). De hecho, la existencia de fuerzas armadas altamente represivas, cuyo entrenamiento y doctrina de empleo se orienta a la supresión de un enemigo siempre interno, ha sido un factor contribuyente a la dificultad para lograr el efectivo control civil de las fuerzas militares.

Asimismo, la constante presión para incurrir en la militarización –primero contra las guerrillas y luego contra los narcotraficantes y los terroristas– coadyuvó a afianzar los reductos de autonomía militar que las fuerzas armadas colombianas mantenían desde mediados de la década del '50 (época del Frente Nacional), materializados primordialmente en una mayor gravitación de los militares en la política.<sup>65</sup> La indiscreción en su accionar y las prácticas de corrupción y de “guerra sucia” a ella asociadas, constituyen un elemento desestabilizador del funcionamiento de la democracia.

A su vez, las facultades otorgadas a los militares –en particular, en el marco de la Política de Seguridad Democrática– empeoraron la situación en torno a los derechos humanos, circunstancia que se ve envuelta de un halo de impunidad. Pese a las “presiones” que Estados Unidos impone en sus programas respecto de las violaciones de derechos humanos, la Fuerza Pública colombiana incurre en abusos que incluyen masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas, a la vez que ha tolerado la comisión de estos mismos abusos por parte de las organizaciones paramilitares. No obstante, a pesar de estos antecedentes, la

<sup>65</sup> DeMarest, G. (1989) *Officer role conception and military government in Colombia: a case study of Colombia*, Colorado: University of Denver, p. 8.





asistencia militar por parte de Estados Unidos permaneció sin interrupciones durante el período estudiado.

### **Reflexiones finales**

En este artículo nos propusimos estudiar las consecuencias que la asistencia militar de Estados Unidos –en el marco de la contrainsurgencia asociada a la Guerra Fría, las políticas antinarcótico y la guerra contra el terrorismo– ha tenido para el desarrollo democrático en Colombia.

A lo largo del análisis, hemos sugerido que los millonarios paquetes de asistencia militar destinados a equipos y entrenamiento, la formación de oficiales colombianos y el asesoramiento en torno a las estrategias y medidas a adoptar respecto a los problemas de seguridad interna, no han hecho más que promover la militarización de la sociedad colombiana, sumando aún más desafíos a los ya existentes para el desenvolvimiento del orden democrático.

En este sentido, hemos señalado que la tendencia a la militarización constituye un obstáculo para garantizar la completa subordinación militar a las autoridades civiles. Así púes, en todas las dimensiones observadas, se ha puesto de manifiesto el “fracaso” de inmiscuir a los militares en dichas misiones, derivando ello no sólo en la prolongación y profundización de las diversas problemáticas, sino en la desprofesionalización de la propia institución.

Por último, debemos decir que la propensión a la militarización de los asuntos de seguridad pública en Colombia, promovida ideológicamente y financiada económicamente por Estados Unidos, ha obstaculizado las iniciativas necesarias para tratar los complejos problemas sociales que tiene Colombia, los cuales necesitan de respuestas integrales que tomen en consideración todas las dimensiones del conflicto.



## Bibliografía

Amnesty International (2000) “Amnesty International’s position on Plan Colombia”. *Amnesty International* [Disponible en <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/049/2000/en/51b36bee-0fed-4c64-ba4c-b1fd9a58e293/amr230492000en.pdf>.]

Amnistía Internacional (2004) “Un laboratorio de guerra: la violencia aumenta en Arauca”. *Amnistía Internacional* [Disponible en <http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/un-laboratorio-de-guerra-la-violencia-aumenta-en-arauca/>]

Álvarez Veloso, D. et. al (2005) “Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto”. En *FLACSO Chile*, Observatorio N° 2.

Brittain, J. “US strategic interests in Latin America: the militarization of Colombia”, En *Global Research*.

Bruneau, T. y Cristiana, F. (2011) “Hacia una nueva conceptualización de la democratización y las relaciones civiles militares”. *Democratization*. V. 18, N° 3.

Dahl, R. (1971) *Poliarchy. Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press, pp. 4-5

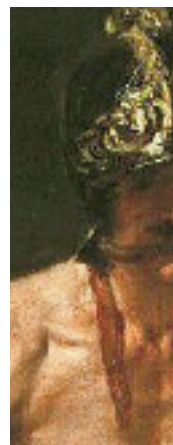
DeMarest, G (1989) *Officer role conception and military government in Colombia: a case study of Colombia*. Colorado: University of Denver.

Eissa, S. (2006) “Reflexiones acerca del terrorismo” [Disponible en <http://www.marash.com.ar/ucam/servicios/profesionales/pys/nota5.htm>]

Ferro J. G. y Uribe, G. (2002) “Las marchas de los cocacoleros del Departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”. *Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*. Salamanca-España.

Fundación CEPS (2006) “Colombia. Un país formal y otro real”. Valencia: *Fundación CEPS* [Disponible en <http://www.rebellion.org/docs/44923.pdf>]

Haugaard L. et al. (2010) “Esperando el cambio; tendencias de la asis-



tencia en seguridad de Estados Unidos para América Latina y el Caribe”. Washington, DC: Publicación conjunta del Centro para las Políticas Internacionales, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Human Rights Watch (2011), “Colombia. Eventos del 2010”. En *Human Rights Watch* [Disponible en <http://www.hrw.org/es/world-report-2011/colombia-0>]

Isacson, A. (2005) “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la ‘guerra contra las drogas’”, en C. A. Youngers y E. Rosin (eds.) *Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos*. Buenos Aires: Ed. Biblos.

Isacson, A. (2010) “Don’t call it a model. On Plan Colombia’s tenth anniversary, claims of “success” don’t stand up to scrutiny”. Washington, DC; Washington Office on Latin America.

Isacson, A. et. al. (2007) “Por debajo del radar. Programas militares de EE.UU. con América Latina 1997-2007”. Washington, DC: Publicación conjunta del Center for International Policy, the Latin America Working Group Education Fund, y the Washington Office on Latin America (WOLA).

National Security Council (2002) *The National Security Strategy of the United States of America*. [Disponible en <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/>]

Nievas, F (2009) “Sociología de la guerra”. En *Revista Redes* N° 5

Pizarro Leongómez, E. (2002) “Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua? En *Revista Análisis Político* N° 46. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Ramírez, M. C.; Stanton, K. y Walsh, J. (2005) “Colombia: un círculo vicioso de drogas y guerra”, en C. A. Youngers y E. Rosin (eds.) *Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos*. Buenos Aires: Ed. Biblos.



República de Colombia (2003) *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, Presidencia de la República – Ministerio de Defensa. [Disponible en <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>]

Sanjuán L. et al (2010) “Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2012”. En *Escuela Nacional Sindical*, Cuaderno de Derechos Humanos N° 22.

Somos Defensores (2012) “2011: cada 8 días fue asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia”. *Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH)* [Disponible en: [http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=105:2011-cada-8-dias-fue-asesinado-un-defensor-de-derechos-humanos-en-colombia-&catid=20:informe-siaddhh-2011&Itemid=11](http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2011-cada-8-dias-fue-asesinado-un-defensor-de-derechos-humanos-en-colombia-&catid=20:informe-siaddhh-2011&Itemid=11)]

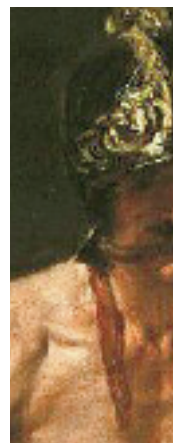
The Center for International Policy’s (2010) “Plan Colombia and Beyond”. En *The Center for International Policy’s*, Colombia Program. [Disponible en <http://www.cipcol.org/?p=1471>]

Tokatlian, J. G. (1993) “Los diálogos gobierno-guerrilla en Colombia y las experiencias internacionales: ¿negociando la paz o perpetuando la guerra?”. En *Historia Crítica* N° 7, pp. 5-8 [Disponible en <http://historiacritica.unian-des.edu.co/view.php/113/index.php?id=113>]

Tokatlian, J. G. (2004) “Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional”, en J. M. Gómez (comp.) *América Latina y el (des)orden global neoliberal*. CLACSO: Buenos Aires.

Tokatlian, J. G. (2004) “La militarización de los Andes”. En *Project Syndicate* [Disponible en: <http://www.project-syndicate.org/commentary/militarizing-the-andes/spanish>]

United State of America Department of Defense (2012), “Executive Budget Summary”, Fiscal Year 2013. [Disponible en: <http://www.state.gov/documents/organization/183755.pdf>]



Vaicius, I. e Isacson, A (2003) “The ‘war on drugs’ meets the ‘war on terror’. The United States’ military involvement in Colombia climbs to the next level”. En *International Policy Report*. Washington, DC: Center for International Policy.

Watts, L. (2001) “Whose Professionalism?: Separating the Institutional Roles of the Military & Police”. En *Conflict Studies Research Centre* [Disponible en: [http://www.iskran.ru/cd\\_data/disk2/rr/046.pdf](http://www.iskran.ru/cd_data/disk2/rr/046.pdf)]

Withers, G. et. al. (2010) “Predica lo que practicas: la separación de roles entre militares y policías en las Américas”. Washington, DC: Washington Office on Latin America (WOLA).

Bagley, B (2012) “Drug trafficking and organized crime in the Americas. Major trends in the twenty-first century”. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars [Disponible en: <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/BB%20Final.pdf>]

#### Documentos Normativos:

Decreto Legislativo 3398 de 1965, Diario Oficial N° 31.842, 25 de enero de 1966. [Disponible en: [http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm\\_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf](http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf)]

#### Otras Fuentes:

Burghardt, T (2012) “The Colombian ‘War on Drugs’, a Family Affair”. En *Global Research* [Disponible en <http://www.globalresearch.ca/the-colombian-war-on-drugs-a-family-affair/5309195>]

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2006) “Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia” [Disponible en <http://www.colectivo-deabogados.org/CONSOLIDACION-PARAMILITAR-E>]



“Condenan ex presidente del Congreso colombiano por parapolítica”, *Prensa Libre*, 25 de mayo de 2011.

Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, Tema: Visita a Colombia, Sur América, por el Equipo de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962, Archivos de Seguridad Nacional, Grupo Especial, Suplemento Secreto, Informe de Investigación en Colombia, citado por AA.VV. (2000) *Colombia nunca más, crímenes de lesa humanidad, Zona 7ª*, [Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/index.html>]

“El escándalo de la ‘parapolítica’ en Colombia”. *El país*, 20 de febrero de 2007

“Presidente Uribe acusa a sindicalistas colombianos de apoyar a las FARC. *Aporrea*, 23 de julio de 2007. [Disponible en: <http://www.aporrea.org/internacionales/n98419.html>]

“Estados Unidos certifica a Colombia en cumplimiento de derechos humanos”. *El Espectador*, 15 de septiembre de 2011.

“La Seguridad Democrática llegó a su techo: Arco Iris”. *Semana*, 25 de noviembre de 2009 [Disponible en <http://www.semana.com/conflicto-armado/seguridad-democratica-llego-su-techo-arco-iris/131797-3.aspx>]

“Las pruebas hablan por sí sola”. *Semana.com*, 11 de noviembre de 2006.

Peña A (2012) “El ex jefe de seguridad de Uribe se declara culpable de colaborar con los paramilitares”. *El país internacional*.

Reiniciar (2010) “Presidente Uribe, nuevamente acusa de terroristas a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”. En *Reiniciar* [Disponible en <http://www.reiniciar.org/node/291>]

“Press Conference with Secretary Gates and Colombian Minister of National Defense Silva from Bogota, Colombia”. *U. S. Department of Defense*, 15 de abril de 2010. [Disponible en: <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4607>]





Reeves, E.: “Justice for Colombia”. En *ProgressOnline* [Disponible en <http://www.progressonline.org.uk/2012/04/13/justice-for-colombia/>]

“Se comprueba vínculo de la familia de Uribe con el narcotráfico”. *Patria Grande*, 10 de junio de 2012. [Disponible en: <http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/se-comprueba-vinculo-de-la-familia-de-uribe-en-el-narcotrafico/>]

“Uribe acusa de terroristas a manifestantes que atacaron a policías con ácido”. *Terra Colombia*, 30 de mayo de 2008. [Disponible en: <http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu11839.htm.>]

“Uribe les pegó a los sindicalistas”. *Página 12*, 22 de julio de 2007

U.S Department of State: *Foreign Terrorist Organizations*. [Disponible en: <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>]

